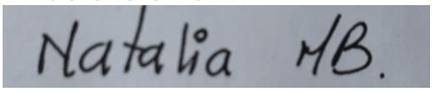
**CONSTANCIA:** En la fecha se realizan llamada al abonado No 3224000369, y se establece comunicación con Cindy Soto Ayala accionante, quien confirmó haber recibido respuesta al derecho de petición por parte de la entidad accionada y manifiesta que se obtuvo lo pretendido en la presente Acción.

27 de enero 2021.



Natalia Mendoza Barrera
Escribiente

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**
**Medellín, veintiocho (28) de enero de dos mil veintiuno (2021)**

| | |
|---|---|
| **PROCESO** | Acción de Tutela |
| **ACCIONANTE** | **CINDY SOTO AYALA** |
| **ACCIONADO** | **SECRETARIA DE EDUCACIÓN GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** |
| **PROCEDENCIA** | Reparto |
| **RADICADO** | **N° 05001 40 03 014 2021 00052 00** |
| **INSTANCIA** | Primera |
| **TEMAS Y SUBTEMAS** | Petición |
| **DECISIÓN** | No concede tutela- hecho superado |
| **SENTENCIA** | **0025** |

Procede el Despacho a resolver la solicitud de tutela promovida por **CINDY SOTO AYALA** en contra de **SECRETARIA DE EDUCACIÓN GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**, encaminada a proteger su derecho fundamental de Petición.

## I. ANTECEDENTES

**1.1. Supuestos fácticos y pretensiones-** En síntesis, manifestó la accionante que, desde el 11 de noviembre de 2020, se presentó ante la entidad accionada, solicitud de certificados de Reporte de Cesantías, Certificado de Salario, requisitos fundamentales creados por la entidad para poder presentar reclamación de

sustitución pensional de sobreviviente y reclamación de cesantías definitivas, por lo que se generó el radicado No ANT 2020ER054253 de la SECRETARIA DE EDUCACION DE LA GOBERNACION DE ANTIOQUIA entidad accionada, como se logra evidenciar en el pantallazo del radicado anexado como prueba.

Indicó que el 17 de noviembre le fue informada que se daba inicio a la elaboración de dichos certificados y del cual solo le fue entregado el certificado de Tiempo de Servicio y señaló que, a la fecha de presentación de esta acción constitucional, no ha recibido los dos certificados en solicitados.

Por lo tanto, pretende se le amparara el derecho fundamental de petición y se le ordenara a la entidad accionada una respuesta completa.

**1.2.- Trámite. -** Admitida la solicitud de tutela el 25 de enero 2021, se ordenó la notificación a la accionada.

**1.2.1 La Directora Jurídica de la Secretaria de Educación**, manifestó que, al derecho de petición incoado por la accionante se le dio respuesta de una manera clara y de fondo, expidiéndose el certificado de la historia laboral y el certificado de salarios requerido, así mismo se le informó que el reporte anual de cesantías debía de ser solicitado a la FIDUPREVISORA, contestación que fue remitida al correo electrónico reportado como se logra evidenciar en los anexos que se adjuntan, en consecuencia, solicita declarar improcedente la presente Acción de Tutela por cuanto, ya le brindó respuesta al Derecho de Petición, objeto de la presente, y se está en presencia de un HECHO SUPERADO.

## II. CONSIDERACIONES

**2.1. Competencia. -** Esta agencia judicial es competente para conocer y fallar de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 de la Constitución Nacional, art. 37 del Decreto 2591 de 1991 y el inciso 2°, numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.

**2.2. Problema jurídico**. - Corresponde al Juez Constitucional determinar si en este caso es procedente la acción de tutela para ordenarle a la accionada, dar respuesta a la petición del 11 de noviembre de 2020 o por su parte la misma ya fue resuelta y comunicada a la accionante.

**2.3. Marco Normativo aplicable. -** Constitución Política: Arts. 1, 2, 11, 48, 49, 86, 228, 230. Decreto 2591 de 1991: Arts. 1, 5, 10, 23, 27, 29, 42. Decreto 306 de 1992: Arts. 4 y 6. Decreto 1382 de 2000.

**2.4. De la acción de tutela -** La acción de tutela conforme al artículo 86 de la Carta Política de 1991, es un mecanismo de protección de carácter residual y subsidiario que puede ser utilizado ante la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, cuando no exista otro medio idóneo para la protección de los derechos invocados, o cuando existiendo otro medio de defensa judicial, se requiera acudir al amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991).

La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite reconocer la validez de los medios y recursos ordinarios de protección judicial, como mecanismos legítimos y prevalentes para la salvaguarda de los derechos. De manera que, al existir estos mecanismos, los ciudadanos se encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que quien alega la afectación de sus derechos debe agotar los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto, exigencia ésta que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrita, que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes.

**2.5. DERECHO DE PETICIÓN. -** En el marco de una democracia participativa, el derecho de petición cumple un papel relevante como factor esencial del estado social de derecho. Es por el ello que la propia Constitución Política lo consagra expresamente en su artículo 23 y le reconoce el carácter de derecho fundamental. Al respecto, la citada norma dispone que "*toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución*".

Ahora, normativamente el derecho de petición se encuentra regulado en la Ley 1755 de 2015, que modificó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, estableciendo como término general para resolver las distintas modalidades de peticiones, los **quince (15) días** siguientes a la recepción, señalando plazos diferentes cuando se trata de peticiones de documentos y de información (diez (10) días) y las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo (treinta (30) días).

La Corte Constitucional en la sentencia de T-332 de 2015 se ha referido en distintas oportunidades a la importancia de esta garantía fundamental, cuya efectividad, según se ha reconocido, *"resulta indispensable para el logro de los fines esenciales del Estado, particularmente el servicio de la comunidad, la promoción de la prosperidad general, la garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la participación de todos en las decisiones que los afectan, así como para asegurar que las autoridades cumplan las funciones para las cuales han sido instituidas (artículo 2o. Constitución Política)"*[1].

*A partir de esta garantía la jurisprudencia ha fijado una serie de reglas y de parámetros relacionados con el alcance, núcleo esencial y contenido de este derecho. Al respecto ha precisado lo siguiente:*

> *"a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión.*

[1] Sentencia T-012 de 1992.

*b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido.*

*c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado* ***3. ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.***

*d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.*
*e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.*

*f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.*

*g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver* (norma que fue derogada por la ley 1255 de 2015)*. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.*

*h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto. El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición.*

*i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T-294 de 1997 y T-457 de 1994."*[2]

**2.6.- EL CONCEPTO DE HECHO SUPERADO. -** La naturaleza de la acción de tutela estriba en garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales. De modo que, cuando la amenaza a los derechos fundamentales de quien invoca su protección cesa, ya sea porque la situación que propiciaba dicha amenaza desapareció o fue superada, esta Corporación ha considerado que la acción de tutela pierde su razón de ser como mecanismo de protección judicial, en la medida en que cualquier decisión que el juez de tutela pueda adoptar frente al caso concreto carecerá de fundamento fáctico.

Respecto a la carencia actual de objeto por hecho superado, la Corte en la T-011 de 2016 ha indicado que *"la acción de tutela, en principio, "pierde su razón de ser cuando durante el trámite del proceso, la situación que genera la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados es superada o finalmente produce el daño que se pretendía evitar con la solicitud de amparo"3. En estos supuestos, la tutela no es un mecanismo judicial adecuado pues ante la ausencia de supuestos fácticos, la decisión que pudiese tomar el juez en el caso concreto para resolver la pretensión se convertiría en ineficaz*[4].

*En efecto, si lo que el amparo constitucional busca es ordenar a una autoridad pública o un particular que actúe o deje de hacerlo, y "previamente al pronunciamiento del juez de tutela, sucede lo requerido, es claro que se está frente a un hecho superado, porque desaparece la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales"*[5]*. En otras palabras, ya no existirían circunstancias reales que materialicen la decisión del juez de tutela."*

---

[2] Ver Sentencia T-377 de 2000, T-173 de 2013, T-211-14, entre otras.

**2.7. El caso en estudio y solución al problema jurídico planteado. -** En este caso, el accionante soporto su petición con copia del envió por correo electrónico, dirigido a la entidad.

Así, si el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada, que debe darse en un tiempo razonable y que debe ser comunicada al peticionario; en este caso, **CINDY SOTO AYALA** mediante derecho de petición dirigido **SECRETARIA DE EDUCACIÓN GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA** presento solicitud de certificados de Reporte de Cesantías, Certificado de Salario.

Por su parte, la entidad accionada manifestó que emitió respuesta al derecho de petición, aportando para ello a PDF 06 copia de la misma, los anexos con copia del correo electrónico enviado a la actora, donde se le brinda respuesta, los certificados solicitados, todo ello se acredita en el mismo PDF.

Prueba de ello es que, en constancia secretarial al inicio de este proveído, manifiesta la señora Cindy Soto Ayala quien dio inicio a la presente tutela que con los anexos recibidos se da por satisfecha la respuesta al derecho de petición, por ella presentado.

De allí que nos encontremos ante una carencia de objeto por hecho superado, ya que el departamento de **SECRETARIA DE EDUCACIÓN GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**. emitió respuesta la cual fue comunicada al correo cindysoto10@hotmail.com

Ahora bien, cuando quiera que la respuesta no sea del agrado del accionante por no serle favorable, tendrá que debatir el sentido de la misma, pero ello no quiere decir que haya vulneración del derecho de petición, pues como indicó la Corte Constitucional en la T-556 de 2013 donde señaló *"que la entidad que debe dar respuesta no estará obligada, como parte del núcleo esencial del derecho de petición, a acceder a las pretensiones del peticionario. Así, el que se genere una respuesta no supone la aceptación de lo solicitado".*

En mérito de lo dicho, **EL JUZGADO CATORCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato constitucional,

## I. FALLA:

**PRIMERO**: **DENEGAR** la presente acción de tutela **POR CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO** promovido por **CINDY SOTO AYALA** identificada con **C.C. No.** 50.986.241 en contra de **SECRETARIA DE EDUCACIÓN GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA**, por los motivos expuestos.

**SEGUNDO: NOTIFÍQUESE** esta decisión a los interesados por el medio más expedito y eficaz, conforme a lo normado en el artículo 30 del Decreto 2591/91.

**TERCERO.** Esta decisión puede ser impugnada dentro de los tres (03) días siguientes a su notificación. Una vez ejecutoriada y de no ser recurrida, remítase el expediente ante la Honorable Corte Constitucional, para su eventual revisión.

**NOTIFÍQUESE.**

***JHON FREDY CARDONA ACEVEDO***
Juez

NMB

Firmado Por:

JHON FREDY CARDONA ACEVEDO
JUEZ MUNICIPAL
JUZGADO 014 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLÍN

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5c1e13d65e4c85433732d89e32df71f4522b0f09ead65297e7852e838613e12e**
Documento generado en 28/01/2021 11:29:41 AM